

COLOMBIA EN LOS 80: HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE LA COYUNTURA HISTÓRICA EN COLOMBIA

*Por: Álvaro Camacho, Alberto Corchuelo,
Jorge Orlando Meló, José María Rojas Guerra*

INTRODUCCIÓN NECESARIA

El texto que el lector tiene en sus manos requiere ser explicado: es un producto de un colectivo de profesores de la Universidad del Valle, destinado al Anuario Lateinamerica, Analysen und Berichte, editado por Olle und Wolfer de la República Federal Alemana, y que será publicado en el número quinto correspondiente al año de 1981. La idea original surgió de uno de los editores del Anuario, quien consideró pertinente que Profesores de la Universidad del Valle Asumieran la responsabilidad de presentar al público alemán una visión panorámica de la situación social colombiana y sus transformaciones más, recientes. Los profesores de la División, José María Rojas, Alberto Corchuelo y Alvaro Camacho y el profesor Jorge Orlando Melo, Decano Asociado de Investigaciones, presentaron cada uno, según sus especializaciones, documentos que luego han sido refundidos en un sólo texto.

Cabe hacer dos precisiones: en primer término, el que se trate de un público extranjero, con frecuencia ignorante de las peculiaridades de nuestra sociedad, obligó a incluir detalles que pueden parecer banales a los lectores colombianos o familiarizados con Colombia. Esto ha sido no sólo necesario, sino que al mismo tiempo ha obligado a los autores a resaltar la significación de algunos fenómenos que precisamente por ser tan familiares en ocasiones escapan a la reflexión y análisis.

En segundo término, la tarea propiamente editorial, es decir, el refundir en un sólo documento cuatro artículos cortos y que corrió a cargo de Álvaro Camacho, no ha sido fácil. En lo posible se ha intentado, respetando los puntos de vista y estilos personales, dar una continuidad y coherencia al texto, aunque a veces los niveles de análisis resultan un tanto desiguales. Ello es inevitable.

Se debe llenar la atención también acerca de la necesidad de que el documento sea debatido: no sólo en la medida en que es posible que algunas afirmaciones causen discusión, otras respondan a perspectivas más o menos personales, sino en cuanto se coloca en juego una dimensión teórica importante. En efecto, el análisis de coyuntura presenta particularidades, entre ellas, la conceptualización misma

de la coyuntura. En el texto se reflejan particularmente en la primera parte, referida a la situación social las discusiones que Rojas y Camacho han sostenido sobre el concepto de coyuntura, y que forman parte de una preocupación de varios profesores de la División. Futuros documentos intentarán precisar y formalizar esta conceptualización.

Cali, Enero de 1981

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES

Una caracterización de la coyuntura social colombiana en la década del setenta debe destacar, como uno de los rasgos predominantes, el acelerado proceso de transformación en el que viejas estructuras pierden rápidamente su vigencia y otras nuevas adquieren creciente importancia. El acelerado proceso de movilidad social, en el que múltiples grupos sociales se desarrollan, modifica y expresan social y políticamente es sin duda uno de los elementos centrales del momento histórico. Se trata de una movilidad impulsada por un proceso indiscutible de desarrollo y diferenciación económica. En efecto, según cifras oficiales, el P.B.I. creció anualmente a un ritmo del 6% promedio en términos reales entre 1970 y 1979, el P.B.I. industrial lo hizo en 6.4% y el agropecuario en 5.0%. Tratándose de promedios, es fácil comprender que se presentaron fluctuaciones hasta llegar a 1980, cuando el crecimiento fue notablemente inferior, como se detalla adelante. De cualquier manera, sin embargo, la tendencia es real, y se hace más significativa al considerar que el crecimiento demográfico experimentó un descenso importante, hasta colocarse en una cifra ligeramente superior al 2%

Este desarrollo se traduce naturalmente en una serie de transformaciones en la estructura de la producción, que se diversifica de manera notable, al punto que Colombia exporta ahora un conjunto relativamente importante de bienes no tradicionales.

Y a ello se añade el que en la actual coyuntura histórica el país experimenta un fenómeno que tiene notables repercusiones en su situación social y económica. Se trata de la llamada economía subterránea, constituida por la exportación de marihuana y cocaína, a la que se agrega el contrabando de exportación masiva de café, azúcar y ganado, principalmente. Este fenómeno, que no refleja necesariamente un incremento en los niveles de la producción, sí se traduce

en un ingreso continuado de divisas, al punto que se calcula que durante 1980 entraron al país mil doscientos veintitrés millones de dólares por ese concepto a la eufemísticamente llamada "ventanilla siniestra" del Banco de la República, a donde entran las divisas clasificadas como, "otros", además de las fuentes tradicionales. Ello ha afianzado a Colombia como un receptor de rentas y transforma una situación crónica de país de escasas divisas. De hecho, los solos intereses producidos por los depósitos del Banco de la República en el mercado internacional ascendieron, según el Banco, a algo más de cuatrocientos millones de dólares durante 1980.

Se comprende, pues, que estas transformaciones tengan una decisiva influencia de la conformación de la sociedad colombiana, y que ya no se pueda hablar de ella como predominantemente rural, agro-exportadora y pre-industrial. Estos cambios remiten a considerarla como una sociedad en creciente cambio en los patrones de asentamiento ecológico, las condiciones de vida y, muy particularmente, las estructuras de dominación social y política.

Si se considera, por ejemplo, el fenómeno demográfico, la sociedad colombiana experimentó en la década de los setenta cambios bastante notorios: mientras en el período 1951-1964 la tasa de crecimiento fue de 3,5% entre 1964 y 1973 fue de 2.8%, y actualmente se halla, como, ya se mencionó cerca del 2%. Mientras entre 1951 y 1964 la relación urbana-rural pasó de 38.9%-61.1% a 51.8%-47.2% en 1973 la misma fue de 63.6% y 36.4%. Para 1980 se ha estimado una relación cercana a 70% y 30%. Este descenso en el ritmo de crecimiento de la población y esta transformación en una sociedad predominantemente urbana, acarrea cambios notorios en variables demográficas tales como el crecimiento y composición de la población económicamente activa y las diferentes tasas de participación. Altera igualmente el conjunto de indicadores relativos a participación en servicios, en donde se hallan fenómenos de gran importancia.

La P.E.A., en efecto, pasó de 3.76 millones a 6.18 millones de 1951 a 1973; para 1980 se calcula en aproximadamente siete millones de personas. El ritmo de crecimiento para el primer período fue inferior al de la población total, en tanto que la tendencia actual puede invertir esa relación. La tasa específica de participación pasó de 33.4% en 1951 a 27.2% en 1973. Este descenso puede deberse tanto a incrementos netos de miembros de la P.E.A. que dilatan su ingreso a la población trabajadora debido a mayores oportunidades educativas y a incrementos en la productividad per cápita, como a cambios en la composición de la

población según su origen rural o urbano. Simultáneamente con estos cambios hay un incremento notable de la participación de la mujer en el mercado laboral.

El sector educativo ha sido uno de los que con más intensidad ha experimentado estos cambios demográficos. Según documentos oficiales, "en el período 1964-1977 el crecimiento de la matrícula fue de 92% para la educación primaria, 3,14% para secundaria y 52,7% para la educación superior. Entre 1964 y 1973 el porcentaje de la población económicamente activa que carecía totalmente de educación formal disminuyó de 27% a 16.4% y el que tenía educación adicional a la primera (esto es, secundaria, superior u "otros niveles") aumentó de 12.3% a 28.7%.¹ Aún así la cobertura del sector es bastante baja, y su capacidad de retención no es compasible con la cobertura; en efecto, el analfabetismo sigue siendo bastante alto al tiempo que solamente 32% de los matriculados en primaria terminan ese ciclo. La deserción aumenta notoriamente al pasar al ciclo secundario, y en el superior es más dramática aún; de cada mil niños matriculados en primer año de primaria, sólo cincuenta, aproximadamente, concluyen el ciclo completo.

Los indicadores relativos a salud son igualmente reveladores tanto de los cambios ocurridos como de las deficiencias del sector: El sistema oficial de seguro social, por ejemplo, cubre a un 8% de la población nacional; "la tasa de mortalidad infantil es superior a la de otros países con un grado similar de desarrollo... (para los menores de un año esa tasa) se redujo de 124 por mil a 80 mil... este nivel es aún preocupante, especialmente si se le compara con los registrados en países latinoamericanos como Venezuela. Costa Rica y Cuba, los cuales fluctúan entre 29 y 56 por mil"². De otra parte, el déficit hospitalario es creciente, y la proporción de camas por cada mil habitantes ha descendido de 2.2 a 1.86.

Todo este conjunto de indicadores evidencia una clara tendencia hacia la conformación de un tipo de sociedad bien diferente a la que los colombianos estaban acostumbrados a imaginar; al mismo tiempo es una muestra también indiscutible del carácter contradictorio del proceso. *En particular lo que respecta al funcionamiento de la demo-*

1. Departamento Nacional de Planeación. *Plan de Integración Nacional* 1979-1982, T.I. pág. 221.

2. *Op. cit.*, págs. 37 y 207.

cracia y su respuesta por parte del Estado, éste incrementa de manera notable su nómina en el sector de gastos de funcionamiento, y con ello el listado mantiene un ejercicio burocrático descomunal que se desempeña prioritariamente como soporte político de un régimen que pierde diariamente el apoyo de la población, como lo evidencia el incremento del gasto militar, el pie de fuerza y, lo más revelador, el creciente poder decisorio de las fuerzas armadas, con las consecuencias que adelante se examinarán.

La estructura de clases ha experimentado también modificaciones bastante notorias. Del viejo país rural compuesto por terratenientes y campesinos, pasamos a una estructura diversificada en la que nuevos sectores surgen a la luz y demandan un puesto bajo el sol. Según cálculos de ANIF. "existe un estrato medio, que frente a una clase alta de 5.6%, y una baja de 78.1% vendría a representar un 16.5% de la población ocupada, un millón ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos personas, incluyendo familiares y dependientes"¹.

La Situación para este sector medio es altamente contradictoria, pues si bien es producto de la diversificación de la estructura económica y resultado de un proceso global de movilidad social, al mismo tiempo experimenta una tendencia a la pauperización. Como lo anota el mismo estudio, en 1979 un 37% de los profesionales y técnicos recibieron ingresos inferiores a \$8.500.00 mensuales, colocándose aún por debajo de lo que podría considerarse una remuneración adecuada para una familia obrera. Uno de cada diez profesionales recibió ingresos inferiores al salario mínimo. En un estudio de ANIF sobre una muestra de novecientos cincuenta casos de juicios ejecutivos analizados "40% correspondían a obligaciones incumplidas por los estratos medios; más de la mitad de las deudas habían sido contraídas en dinero para fines no especificados, 11,3% por no cancelación de arrendamientos. 8% para compra de vestuario y víveres y 6.7 % por saldos morosos en la compra de electrodomésticos."².

Sí bien las cifras son bastante dramáticas, y de varias maneras ilustran una situación de pauperización, no es menos cierto que adolecen de algunos defectos, tales como el no discriminar esa etérea categoría de "profesionales y técnicos afines", en la que se incluye una amplia gama social, o el no discriminar entre empleados y aspirantes.

-
1. Ernesto Samper Pizano, "La cenicienta Clase Media", Conferencia dictada en la cámara de comercio de Bucaramanga, Julio 18 de 1980, p. 3.
 2. Op. Cit, p.5.

De otro lado el dramatismo de las cifras oculta un hecho central, cual es que tales sectores simplemente, no existían hace pocos años. Ellos son producto precisamente del proceso de desarrollo y movilidad social reciente. De hecho, se podría plantear el argumento de que estos sectores son uno de los pilares *de* un proceso de desarrollo económico que descansa, entre otras cosas y de manera muy importante, en la producción de bienes típicamente consumidos por la población de altos y medianos ingresos.

Por ello estas cifras, a la vez que exhiben el drama de unos sectores que surgen y se desarrollan con cierta rapidez, muestra el fenómeno de diversificación de consumos que corresponde a la nueva sociedad. Los automóviles, las motocicletas, los electrodomésticos empiezan a adquirir un peso significativo en la canasta familiar para empleados, al lado de la vivencia, el vestuario y la alimentación. La popularización del crédito al consumo se ha traducido en un incremento del gasto en rubros anteriormente no soñados, y el endeudamiento precipita en un foso sin fondo a números cada vez mas importantes de la población, particularmente aquella ubicable en los sectores medios.

A la par con ellos se ha ido desarrollando de manera creciente un nuevo sector de la población que hoy día reclama una atención particular. El carácter oligopolítico de la producción industrial y su baja capacidad de absorción de empleo, la insuficiencia del salario del jefe de familia y el incremento de las demandas de productos de consumo final, particularmente de la población de bajos ingresos, ha estimulado el desarrollo de un mercado atendido por lo que se ha dado en llamar sector informal, tiste eufemismo se ha venido utilizando para referirse al conjunto de población que, carente de empleos estables, de seguridad social y cualesquiera formas de asistencia se dedica a la venta de mercancías y prestación de servicios que el capital no ha penetrado aún de una manera directa. La venta de comestibles, cigarrillos, golosinas y vestuario de inferior calidad está mayoritariamente en manos de vendedores ambulantes, al igual que la prestación de múltiples servicios personales. A estos grupos comerciales y de servicios informales pero relativamente estables se agregan otros, de menores recursos aún, compuestos por trabajadores varios que desarrollan actividades marginales a la producción y distribución de productos industriales. La recolección de papel y basura para reciclaje en las ciudades, la vigilancia y servicio doméstico son actividades invariablemente desempeñadas por estos sectores de la población, fuentes de ingreso irregular para "los condenados de la tierra".

El fenómeno de la informalidad que hace algunos años preocupó notoriamente a los teóricos sociales latinoamericanos, bajo el título de problemática de la marginalidad se ha convertido hoy día en un fenómeno con el que la población colombiana se ha enseñado a vivir.* Más aún, su persistencia se ha traducido en una relativa estabilización que se expresa en un sistema institucionalizado de trabajo, particularmente para grupos de edad que han salido de la fuerza de trabajo o no han entrado a ella (población vieja o muy joven) y para la población femenina. Con estas formas de desempeño las familias de más bajos recursos intentan elevar un ingreso familiar que no puede ser colmado por el empleo de uno de sus miembros, incluso en el llamado sector formal de la economía. Se ha encontrado, que en algunas ciudades no ampliamente industrializadas, el ingreso personal de un informal puede, en algunos casos, equiparse con el de un asalariado en el sector formal competitivo, en el cual la reducción del salario real es bastante aguda.

Este fenómeno, pues, surge como respuesta no solamente a la deficiencia de los mecanismos de generación de empleo, sino al incremento real de la demanda de bienes y servicios por parte de números crecientes de habitantes del país. Su carencia de seguridad social, de un régimen prestacional, los coloca como la porción más vulnerable de la población colombiana, y frente a su situación, la acción del Estado ha sido poco menos que nula, y los pocos intentos por atender a parte de esta población (aquella con algunas capacidades empresariales) se estrellan contra la incapacidad estatal de desempeñarse en el área.

La movilidad social colombiana ha afectado no solamente a los llamados sectores medios y a estos nuevos actores de la escena económica. Como producto del proceso inflacionario, como eje central de la actividad económica "subterránea", una nueva capa social experimenta un desarrollo innegable. Crecida al amparo de las ganancias otorgadas por el contrabando y el mercadeo de droga, la llamada clase emergente irrumpe con la fuerza de sus chequeras en la escena nacional. Parte de su significación consiste en que los orígenes de su riqueza y poderío contrarían los preceptos éticos y políticos que la vieja oligarquía colombiana ha movilizado tradicionalmente en su proceso de dominación. Hoy día la clase emergente compite, y cierta medida favorablemente, con esa vieja oligarquía por el control de algunos

* En 1980 este sector absorbió el 65% aproximadamente del crecimiento del empleo en el país.

aparatos empresariales y estatales. El conflicto político que genera esta competencia se ve contrarrestado a medias por la complementariedad de intereses de esta clase emergente y, particularmente, la fracción financiera de la burguesía colombiana. En la medida en que la comercialización ilícita tiene como efecto el incremento del dinero en circulación, la banca colombiana encuentra allí una fuente adicional de recursos financieros que le permiten aumentar su control, y poder sobre la economía nacional. A su vez, esta clase emergente presiona nuevas formas de consumo (automóviles de lujo, viviendas suntuarias y otros bienes conspicuos), lo que de varias maneras favorece a los comerciantes, productores nacionales y, especialmente, especuladores. Es sin duda esta clase la que experimenta mayores beneficios de la coyuntura económica nacional, así su legitimidad social sea aún hoy fuertemente cuestionada por quienes aspiran a conservar el orden agro-pastoril de la vieja Colombia.

El impacto social de este fenómeno, cuantitativamente restringido y notablemente estratificado, ha sido de tal magnitud que la gran burguesía se ha encargado de divulgarlo y denunciarlo como un hecho anormal. Se lo denomina "enriquecimiento ilícito" y se lo impugna socialmente pero se lo legitima jurídica y económicamente. El mal gusto, las malas maneras, la ignorancia, en suma, "la lobería" de la denominada clase emergente le disgusta a la burguesía. Es así cómo mientras le cierra las puertas de los clubes sociales le abre de par en par las puertas de la bolsa de valores. Por otra parte esta nueva capa social, encumbrada económicamente, busca reconocimiento social y en esta búsqueda ha provocado un sesgo notable en los procesos de urbanización de las principales ciudades del país. Casi toda la industria de la construcción se ha volcado hacia la satisfacción de la demanda de una vivienda extremadamente costosa. Hoy es normal la construcción de edificios, cuyos apartamentos valen diez, veinte, treinta y más millones de pesos. Como la vivienda masiva para las capas sociales de medianos ingresos no es un negocio tan lucrativo como el anterior, se ha aumentado notablemente el déficit de la vivienda que demanda la capa social de profesionales y de técnicos que reciben fundamentalmente ingresos de salarios y que tienen una relativamente alta movilidad de empleo y de asentamiento en el espacio urbano. Es así como en el último año los arrendamientos para la vivienda que utilizaba esta capa social pueden haber aumentado hasta en un 50%. Y como el gasto mensual en vivienda ya venía absorbiendo entre el 40% y el 50% de los ingresos, esta capa social, símbolo de la "clase media", baluarte de la democracia, empieza a experimentar un notable deterioro en su

calidad de vida. Es el fenómeno que la ANIF ha denominado "la proletarianización de las clases medias", al cual se ha hecho referencia.

Cuáles pueden ser las consecuencias políticas del encumbramiento de una capa social emergente no ilustrada y del descenso y posible descomposición de una capa social relativamente ilustrada? No lo podemos determinar con precisión. Lo que sí podemos señalar es que todo va a depender del grado de asimilación e integración de la capa social emergente a la élite de la clase burguesa y de las alternativas ocupacionales, principalmente fuera del país, para la capa ilustrada. El control por parte del gobierno de Venezuela a las migraciones masivas de nuestra fuerza de trabajo no calificada estaría indicando que las necesidades de fuerza de trabajo calificada de ese país tienden a ser selectivas: Si se da el fenómeno de la integración y asimilación de la capa emergente, simplemente se reforzaría el proyecto político de dominación burguesa. Si esto ocurre, la capa emergente fijaría su residencia en Miami, desarrollaría una labor de saqueo de la economía nacional y poco le importaría qué ocurre con el régimen político de dominación. Si la capa ilustrada encuentra una salida provisional, un escape en la migración, no se va a manifestar internamente como una fuerza social que presiona el cambio. Si no encuentra salida tendrá que sumarse a la opción que tomen todos los asalariados del país y en particular a cualquier proyecto político que pueda salir de la clase obrera.

Pero el proceso de movilidad social no se agota aquí. Ha habido un ensanchamiento notable, un inusitado crecimiento cuantitativo de las capas sociales que comercian en bienes raíces urbanos y rurales, en productos agrícolas e industriales, que tienen negocios de restaurantes, griles, moteles, cafeterías, tiendas especializadas en consumos costosos y toda la línea del confort, la recreación y el placer. El conjunto de estas capas sociales, eminentemente urbanas, presenta una notable estratificación de la que se podría denominar la fracción comercial de la clase burguesa. La prosperidad de todos estos negocios ha permitido un rápido proceso de acumulación de capital dinero que a su vez se ha convertido en factor de demanda de apartamentos, automóviles y fincas de recreo, bienes extremadamente costosos para ser adquiridos con dineros que no hayan sido acumulados fácil y rápidamente. El crecimiento y consiguiente renovación social de las capas y estratos que se reproducen a partir de la condición de ser propietarios de mercancías ha traído consigo cambios importantes en la distribución de los espacios urbanos: nuevas zonas comerciales y recreaciona-

les, transformación de las zonas residenciales en todas las ciudades del país. Todas estas capas sociales, a no dudarlo, están satisfechas con el orden social e institucional existente. Son capas empleadoras de fuerza de trabajo, generalmente no calificada. Por su origen social una parte proviene de capas medias campesinas y urbanas localizadas en regiones aisladas y hasta hace poco tiempo económicamente deprimidas, pero que a raíz del auge de la marihuana y de la coca han pasado a ser centros estratégicos de producción o de comercialización. En estos casos quienes han logrado algún nivel de acumulación salen de la región, de tal manera que el fenómeno de la movilidad social está relacionado con el de la migración. Estas regiones, entre las cuales se destacan la Sierra Nevada y su zona de influencia (Santa Marta, Valledupar, La Guajira) y los Llanos Orientales, cuyo epicentro es Villavicencio, han pasado a ser regiones que atraen una masa considerable de población que va en busca de fortuna, algunos sin disponer más que de su fuerza de trabajo, otros con algún capital para invertir, ya en la producción, ya en la provisión de los insumos, de los bienes y de los servicios que demanda la población vinculada directamente a la producción, elaboración y comercialización de la coca y la marihuana.

Otra parte de la población que ha llegado recientemente a formar parte de esa fracción comercial de la clase burguesa tiene su origen, por lo que respecta a la acumulación de capital-dinero, en los beneficios obtenidos de la Bonanza Cafetera en los años 1977-1978. Es preciso advertir que la valorización de las tierras cafeteras no solamente provino de los altos precios del café, sino también de la presión de los dineros acumulados en el sector de la denominada "economía subterránea". Ciudades como Pereira, Cartago, Armenia y Manizales, situadas en el corazón de la zona cafetera, se han transformado social y urbanísticamente. Hay además una ostensible vinculación hacia afuera, ya en el gasto, ya en los negocios. Por ejemplo, nos parece significativo que se hayan establecido vuelos directos entre Miami y Pereira. Parecería que el patrón de estratificación tiende a una polarización en los extremos, sin que se de la mediación de capas intermedias que operen como amortiguadores sociales, O muy ricos o muy pobres son los términos de la oposición social. Durante 1980 el más alto índice de incremento en el costo de vida correspondió a la ciudad de Manizales. En Pereira los fenómenos de descomposición social y delincuencia son de tratamiento exclusivo por un escuadrón de la muerte. Su manejo parece ser indispensable para que se puedan mantener en paz los terminos de la oposición.

Habiendo en la zona un proletariado especializado en la recolección de café, el cual rota y Circula según la abundancia o escasez de la cosecha en cada una de las microrregiones cafeteras, su producción material está subordinada a ese proceso de circulación, pero en la medida en que un número considerable de estos trabajadores tienen un núcleo familiar constituido su reproducción social se subordina a la ubicación social de este núcleo. Por lo general se trata de familias residentes en las barriadas de las ciudades, donde las mujeres, los niños y los ancianos se ven obligados a realizar los oficios del denominado "sector informal" de la economía, al cual ya hemos hecho referencia. Serían necesarios entonces varios ingresos formales e informales para que se pudiera asegurar la reproducción de un núcleo familiar que sólo es parcialmente proletario. Entonces, a la existencia de una fuerza de trabajo especializada y proletarizada no correspondería exactamente una forma proletaria en la producción ampliada de esa fuerza de trabajo. En estas condiciones se encuentra la mayor parte de los sectores del proletariado agrícola y no pocos sectores del proletariado industrial, particularmente aquellos que reciben ingresos escasamente por encima del salario mínimo, esto es de \$5.300 mensuales. Se calcula que una familia de cinco personas requiere de tres salarios mínimos para reproducirse a nivel de subsistencia. Tal vez se puede así explicar en parte por qué las luchas de clases se expresan predominantemente bajo la forma de luchas populares y en una escala local, regional.

En los dos últimos años el proletariado de la gran industria parece haber alcanzado un alto índice de estabilidad en el empleo, debido tanto a un fortalecimiento en la capacidad de negociación sindical, como bajo el ritmo de generación de empleo que determina la expansión de este tipo de industria. Normalmente los sindicatos de la gran industria han pactado aumentos de salarios por encima de los índices de crecimiento del costo de vida anual, de tal manera que el salario real de este estrato de trabajadores no se ha deteriorado muy sustancialmente, y aunque sí se ha visto menguado, su caída es menos significativa que el de otros asalariados. Entonces su disponibilidad para la movilización social, para asumir la gestación y dirección de un proceso de cambio del orden social y político, requeriría de motivaciones inducidas por una ideología revolucionaria, y como a este nivel no solamente hay una pluralidad ideológica en la dirección sindical sino también una enorme distancia entre la dirección y las bases, los conflictos sociales originados en los intereses y en las luchas obreras están completamente fuera de toda posibilidad de expresión. Por otra

parte el contexto generalizado de represión militar a toda expresión de inconformidad con el sistema de dominación, opera como *un* mecanismo de intimidación sobre las organizaciones gremiales de los trabajadores. Durante 1980 solamente hubo 49 huelgas, el número más bajo desde 1975.

La Modalidad de los Conflictos Sociales

Dentro de esta óptica los procesos de composición y descomposición de clases sociales no tiene una base homogénea, una estructura única a nivel nacional, de tal manera que los distintos ritmos de desarrollo económico regional no solamente conllevan un mayor grado de diferenciación o estratificación interna a las clases en su proceso de formación, lo cual incide notablemente en la expresión de un comportamiento unitario-clasista, sino que también las luchas de clases propiamente tales se expresan en lo fundamental bajo la forma de conflictos sociales localizados regionalmente. Este es un fenómeno característico de la segunda mitad de la década del setenta. Hay una diferencia notable con los primeros años de la década en cuestión, cuando los conflictos sociales en diferentes lugares del país, en campos y ciudades, constituían básicamente la expresión de movimientos sociales organizados: movimiento de usuarios campesinos, de indígenas, movimiento estudiantil, movimiento guerrillero no unificado y movimiento obrero no unificado.

La modalidad por excelencia de los conflictos sociales en la segunda mitad de la década del setenta la constituye la realización de Paros Cívicos, esta forma de lucha popular se ha caracterizado por la movilización de todas las capas sociales de una población en torno a la exigencia de soluciones estatales a problemas que afectan las condiciones materiales de vida colectiva: acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, vías carreteras, hospitales, colegios. Estos paros aunque tienen objetivos eminentemente reivindicativos adquieren una dimensión política de confrontación con los aparatos gubernamentales y de represión del listado, pues la organización del paro en la gran mayoría de los casos ha sido obra de líderes que actúan por fuera de los partidos liberal y conservador en los cuales se sustenta la dominación de orden del político existente. *En* algunos casos el Gobierno ha tenido que movilizar rápidamente recursos técnicos y financieros como ocurrió en Tunja, ciudad intermedia que carece de agua potable. En otros, como en Barrancabermeja y Apartado, por ejemplo, se imponen alcaldes militares. Y la solución militar ha sido en los dos

últimos años la solución **par excellence**, lo cual estaría revolando el progresivo asolamiento de las soluciones políticas centrales a los conflictos sociales regionales. Mientras el Gobierno presenta a la consideración del Parlamento un proyecto de ley de amnistía para los guerrilleros, el ejército y la aviación echan a andar un gigantesco operativo de contrainsurgencia en las regiones de Caquetá y Uraba donde se estima que la movilización de tropas puede ser del orden de los 10.000 hombres.

Todo parece indicar que allí donde los paros cívicos tengan que ver con algún tipo de influencia del movimiento guerrillero y del movimiento obrero serán objeto de un tratamiento masivamente represivo. Cada uno de estos movimientos, todavía no unificados ha tenido un papel destacado en cuanto a precipitar conflictos sociales, cuya trascendencia para aglutinar y movilizar fuerzas sociales no se puede considerar de mayor relevancia.

Interpretando el significado social y político de los paros cívicos de alcances puramente locales y regionales, las cuatro centrales obreras del país lograron constituir a comienzos de 1977 un Consejo Nacional Sindical que pudo mantenerse firme en asumir la responsabilidad política por la realización de un Paro Cívico Nacional el 14 de Septiembre de ese año. Con excepción de Bogotá, la participación obrera fue de muy escasa significación, hecho este que estaría indicando un alto grado de burocratización del aparato sindical que sostuvo la consigna del paro. Por ejemplo, en el Ingenio Central Castilla, donde laboran un poco más de cuatro mil trabajadores, y de cuyo sindicato fue dirigente durante muchos años Manuel Felipe Hurtado, miembro en ese momento del CNS como Presidente de la CTC, ese día todo fue normal, nada pasó en Central Castilla. Y en todo el sector azucarero solamente el sindicato de base del Ingenio San Carlos hizo efectivo el paro. En ciudades como Bogotá y Medellín, donde fue importante la participación obrera, el hecho socialmente relevante lo constituyó la movilización de la población residente en los barrios donde las condiciones materiales de vida son las más inhóspitas de todo el espacio urbano, por tanto, donde viven las "gentes pobres". Y aquí la represión fue particularmente aguda.

Hasta el momento todos los intentos de organizar un Segundo Paro Cívico Nacional han fracasado. Es así que la "localidad" de los conflictos sociales sigue siendo la forma dominante de los procesos de movilización social. Estamos en la iniciación de la década del ochenta en una situación en la cual el sentido común nos pueda hacer gritar

A voz en cuello: "a este país nada lo conmueve ni lo mueve nadie".

Al cambio cuantitativo tan radical de asentamiento de la población, a ese fenómeno de "urbanización" del país le han acompañado cambios de cualidad de la vida, en magnitudes cuya medición sociológica está por realizarse. Sin embargo nos parece pertinente destacar que la vida apacible y la seguridad e integridad personales forman parte del pasado histórico de las ciudades colombianas. La violencia urbana esta a la orden del día mientras que la violencia en el campo es predominantemente una guerra revolucionaria, en estas circunstancias el aparato estatal de justicia, concebido para tiempos de paz social y sin tener el control de un aparato represivo-militar ni recursos técnicos y financieros para administrar y ejecutar eficientemente la justicia, se ha demostrado inoperante, se ha desprestigiado, se le han suprimido sus atribuciones principales y los jueces han quedado tendidos a mitad de camino en el cruce de balas entre las organizaciones de los delincuentes más comunes, los CAES, GOES y demás grupos supe especializados de los organismos de inteligencia militar, los grupos paramilitares, escuadrones de la Muerte de esos mismos organismos y otros cuantos tienen "permiso para matar" o de quienes, atendiendo las instrucciones del ministro de la Defensa se han armado! En Barranquilla, en Ciénega, en Medellín varios jueces han caído ametrallados. En Santa Marta y en toda la Guajira las balas y las bombas son los indicadores más precisos de la existencia de pequeñas discordias y conflictos entre "familias". Primero en Bogotá, luego en Pereira y Cartago, y actualmente en Medellín, no pasa un día sin que se encuentren cadáveres tirados a la vera de las carreteras, cadáveres que nadie identifica ni reclama, en Medellín la situación ha llegado a tales extremos que el ex presidente Carlos Lleras Restrepo denunció la existencia de un Escuadrón de la Muerte y exigió que se investigará, se terminara con este método de administrar la justicia! Y todo esto ocurre en plena vigencia del lisiado de Sitio y de un estatuto de Seguridad que cercena derechos individuales y en virtud del cual se han institucionalizado formas de terror y tortura como método para descubrir y dismantelar a las organizaciones políticas que actúan en la clandestinidad. La defensa de los Derechos Humanos ha llegado a ser una tarea peligrosa, una práctica subversiva, que atenta contra la seguridad del Estado, Así fue considerado por el Gobierno actual el informe de Amnistía Internacional.

Parecería que este complejo proceso estaría contribuyendo a mantener un sistema político de "Democracia Restringida", una demo-

cracia formal de no participación, esa fórmula mágica que seguramente envidian los dictadores militares tradicionales.

La Corrupción

No hay en Colombia quien, por lo demás, no reconozca la década del setenta como el reinado de la corrupción. Cuando el presidente Turbay ofrecía gobernar con los más capaces y honestos estaba haciendo realmente una oferta original, dado el nivel a que había llegado la credibilidad nacional sobre el procedo político. No se trata de que la década haya generado la corrupción: por el contrario, ella ha signado la historia colombiana, de tal modo que se podrían señalar sus hitos más notables desde el siglo pasado, y al punto en que ha llegado a convertirse en un elemento consustancial al funcionamiento del Estado y la política colombiana. Pero es innegable que durante los últimos años se han tocado a niveles en los que la funcionalidad de la corrupción amenaza con desbordar el ordenamiento que le dio origen y sustentación. En efecto, alimentada por la necesidad de dotar a una porción importante de la población de unos ingresos que de otra manera no podría obtener, impulsada por las exigencias de lealtad política de un régimen tradicionalmente carente de legitimidad, estimulada por las exigencias de evadir los engorrosos procedimientos administrativos y lograr así mayor eficiencia para el funcionamiento no sólo del capital, sino de la misma vida diaria, la corrupción ha campeado oronda por la vida nacional, garantizando a las clases dominantes unos mecanismos bastante eficientes de apropiación de recursos.

Sin embargo, "hasta la sal se corrompe", y los límites de la tolerancia pueden hallarse próximos. Y si no han llegado ya es porque el mal ejemplo tiende a cundir, hasta generalizar una actitud frente a la vida en la que el mayor valor se adscribe a quien pueda exhibir más habilidad en la tarea corrupta.

Si el Estado mismo es agente de unos procesos de corrupción que incluyen la usurpación por parte del ejecutivo de la administración de justicia, el gigantismo burocrático, la asignación de salarios monumentales a los somnolientos parlamentarios, las masivas giras nacionales e internacionales presidenciales, la asignación de cuotas de poder a pequeños caudillos locales y otras manifestaciones del folclor tropical, no es de extrañar que la población encuentre legítimo jugarle doble al Estado y trate de sacar su propia tajada. Se ha dicho, no sin razón.

que quien quiera entender la estructura y funcionamiento del listado colombiano, no tiene más que intentar obtener por las vías legales su paz y salvo tributario o una licencia de importación.

Corrupción y movilidad, pues, se anudan de manera inextricable; la primera se ve alimentada por la segunda, en tanto que ésta es una de las fuentes de la primera; la apropiación de dineros del listado no es un fenómeno insólito en Colombia.

Por ello no es de extrañar tampoco que en la lógica de sus prácticas se encuentren complementadas la gran burguesía financiera y la clase emergente, especialmente en tina de sus versiones más notorias: las mafias. La segunda contribuye a inundar de dólares la economía nacional, la primera se beneficia de la política estatal de emitir bonos de alto rendimiento para intentar recoger sus arcas con los altos intereses. Y ambas se unificarán en el momento en que el endeudamiento del estado permita el máximo de apropiación de sus recursos por las fuerzas combinadas de chequeras y pistolas.

El proceso es creciente, y frente a él se levanta el ejército, que no escapa a la corrupción, pero que pretende eruirse como lo único limpio que le queda al país, por tanto merecedor indiscutible de ser el titular del poder y representante de la nacionalidad colombiana.

En suma, tendríamos que se configura un cuadro social donde los procesos de movilidad social, tanto en las regiones de mayor desarrollo urbano-industrial como en las regiones recientemente incorporadas al proceso de acumulación de la denominada economía subterránea, aunque no logra completamente el agudo contraste entre los más ricos y los más pobres, alcanza tales proporciones que puede neutralizar el efecto social movilizador del deterioro del nivel de vida en capas medias ilustradas y en una masa considerable de fuerza de trabajo proletarizada que para efectos de su reproducción ampliada no puede actuar completamente como clase proletaria. Por otra parte, la imposición de un listado políticamente estrecho e intolerante hace en extremo difícil para los estratos obreros estables, que tienen capacidad de negociación y mantienen su precario nivel de vida, inducir procesos de cambio con el orden social y político existente. Esta parece ser la situación social en la cual se encuentra el país a la entrada de la década de los ochenta.

EL DESARROLLO ECONÓMICO

El relativamente acelerado ritmo de Crecimiento de la producción, la intensificación del proceso inflacionario, la creciente concentración del ingreso y e mayor tirado de centralización del capital, constituyen las características más sobresalientes de la evolución de la economía colombiana durante la década del setenta. Tales características bien pueden considerarse como manifestación es de las tendencias del patrón o estilo de desarrollo de la economía colombiana y de las formas como resuelve sus contradicciones.

Este patrón de desarrollo, que engloba el modo de acumulación y el de distribución de ingresos, si bien adoptó nuevas modalidades, no sufrió sustanciales modificaciones y más bien logró consolidar sus tendencias hacia la concentración oligopolica. El gran capital nacional en conjunto con el capital extranjero y el capital estatal, aquel destinado a apoyar la acumulación privada, lograron ampliar su radio de acción expandiendo y modernizando las actividades que ya controlaban, acoderándose de otras que estaban fuera de sus dominios y abriendo nuevas esferas productivas.

El proceso de acumulación de capital dentro del sector oligopolico se vio enormemente favorecido durante una gran parte de la década, por la misma política económica del estado, preferencialmente de la clase obrera, por el creciente poder de los grandes grupos económicos, por las coyunturas favorables del sector externo que dinamizaron los, mercados internos y por la concentración de ingresos que acompañó a este proceso *de* acumulación y que le otorgo un punto de apoyo básico para la reproducción del capital, al asegurarle un mercado dinámico.

El empleo de fuerza de trabajo, por su parte, no fue tan dinámico dentro del sector concentrador del capital. Si bien tuvo una notable expansión si se le compara con la década del sesenta, no tuvo el suficiente empuje como para captar la creciente población que alimentaba la oferta de trabajo. El sector competitivo de la economía, el mismo sector estatal y, particularmente, el así denominado sector informal fueron los encargados de absorber los excedentes de población, sectores que contribuyeron decisivamente a reducir las tasas de desempleo abierto.

Si bien las tasas de salario real de esta masa de trabajadores lograron incrementarse, el salario mínimo real alcanzó un débil incremento, los trabajadores del sector oligopólico perdieron poder de

compra. En este sentido, se produjo un proceso de redistribución de ingreso, dentro del sector asalariado, incluyendo a los trabajadores del sector informal. Este proceso afectó también a cierto tipo de trabajadores calificados, incluso profesionales, particularmente a los aspirantes al mercado de trabajo, cuyas tasas de salario real se vieron seriamente reducidas.

Por el contrario, aquella población que concentra el mayor porcentaje del ingreso, el 20% más rico, logró incrementar su participación dentro del creciente nivel de ingreso de la economía. Si bien, entonces, no puede afirmarse que los pobres se hicieron más pobres, lo que sí es incuestionable es que el porcentaje más rico de la población se hizo más rico logrando captar una mayor participación dentro del creciente total por repartir.

El Estado, por su parte, a pesar de los buenos propósitos y de las declaraciones de intención de los distintos gobiernos, no logró captar una mayor participación en el excedente social generado dentro de la economía y, por el contrario, redujo su **participación**. De esta manera, el gasto social del Estado, destinado a favorecer el salario social, tuvo severas restricciones, afectando aún más la distribución del ingreso.

Por último, la intensificación del proceso inflacionario que acompañó al crecimiento de la economía colombiana, puede verse en gran parte como resultado y expresión de las luchas de los poderosos grupos económicos, incluyendo el listado, por controlar, a través de un mayor acceso a los recursos financieros (monetarios), el proceso de acumulación de capital.

Al finalizar la década del setenta, llena de bonanzas para el capital, la economía empieza a resentirse y paulatinamente entra en una contracción de sus niveles de actividad. Las perspectivas para la década del 80 no son nada favorables, aunque bien sabemos que los auges y recesiones son de la naturaleza misma del desenvolvimiento de las economías capitalistas.

El comportamiento de la economía

A partir de 1979, la economía colombiana empezó a manifestar claros signos de desaceleración en su ritmo de actividad los que en el pasado año aparecieron con mayor intensidad. Los estimativos señalan cómo el crecimiento de la producción agregada de bienes y servicios en el año 1980; medida a través del Producto Interno Bruto, difícilmente alcanzará la cifra del 4%.

Al tiempo que se presentaba esta desaceleración en el ritmo de actividad, el proceso inflacionario que desde el año de 1974 ha venido acompañando el desenvolvimiento de la economía, sostuvo su ya larga, persistente e intensa acción, al incrementarse el nivel de precios de la economía en un 26% durante el año de 1980.

Los anteriores resultados demuestran la incapacidad de los instrumentos de política económica hasta ahora empleados por el gobierno de Julio César Turbay y sus Ministros de Hacienda, para alcanzar los objetivos de estabilización y crecimiento que se han propuesto. Por el contrario, en tanto que las medidas adoptadas para aminorar el ritmo de incremento en el nivel de precios han resultado ineficaces, el crecimiento de la economía se ha resentido, en gran parte como resultado de la misma política de estabilización.

El nivel de la actividad económica

El año de 1978 marcó el final de un período de auge en el nivel de actividad de la economía colombiana que se inició en 1970 y que sólo se interrumpió en el año de 1975. Este período de auge se vio enormemente favorecido por el comportamiento del sector externo de la economía, gracias a los altos precios que logró el café en los mercados internacionales y en menor medida al auge de las exportaciones industriales que se presentó hasta 1976.

A partir de 1979 los distintos sectores productivos, agricultura, industria manufacturera y construcción, que en conjunto representan el 47%, del PÍB desaceleraron su ritmo de actividad ocasionando una violenta contracción en el dinamismo que traía la economía.

En el pasado año se estima que el sector agropecuario tuvo un crecimiento negativo, si se excluye la producción cafetera, hecho que se presenta por primera vez, en la economía nacional, afectándose fundamentalmente la producción de alimentos. Los inertes incrementos en los precios de los insumos industriales, fertilizantes, abonos, fungicidas, constituyen sin duda uno de los factores que más han desestimulado la producción agropecuaria al igual que factores de orden climático y en cierta medida las altas tasas de interés, que, conjuntamente con el comportamiento de los costos de los insumos, han afectado la rentabilidad de los cultivos.

La actividad industrial demostró en el año de 1980 una de las más bajas tasas de crecimiento de su historia reciente, con un incremento en su producción que se estima entre un 2% y un 3% Entre

los distintos factores que han desestimulado el crecimiento industrial, pueden mencionarse:

El proceso de liberación de importaciones, preferencialmente en las ramas de textiles, confecciones, automotriz y metal mecánica. A pesar de que aun las tasas de protección son elevadas, éstas no resultan eficaces pues los precios internos se encuentran muy por encima de los internacionales. Esta liberación y el alto contrabando afectaron severamente los mercados internos de estas industrias.

El comportamiento de los empresarios hacia la innovación tecnológica. En verdad, a pesar de las grandes facilidades de importación de maquinaria, los empresarios industriales no adoptaron una actitud positiva y dinámica hacia la introducción de innovaciones tecnológicas, de tal forma que el ritmo de crecimiento de la productividad ha sido muy leve, afectándose la capacidad competitiva de la industria.

En gran parte, como resultado del anterior comportamiento, la gran reducción en el ritmo de crecimiento de las exportaciones industriales. A pesar del comportamiento de los salarios y de la elevada tasa de devaluación de la moneda nacional frente al dólar, la industria no ha sido capaz de mantener cierta competitividad en el mercado mundial. Las exportaciones industriales apenas crecieron en un 11%, durante 1980 lo que en términos reales significa un crecimiento negativo.

La fuerte contracción de la demanda agregada de la economía inducida por la política económica, dentro de condiciones de costos crecientes y mayores precios. Por otra parte, la caída en los salarios reales ha actuado en el sentido de contraer la demanda sobre las industrias de bienes de consumo masivo.

Las contracciones de crédito bancario y las altas tasas de interés han ocasionado también efectos negativos sobre la tasa de ganancia, más cuando las empresas industriales tienen una fuerte tendencia, a financiarse con fuentes externas.

Los resultados negativos en el desarrollo industrial provocaron un airado enfrentamiento entre los representantes de la gran industria (ANDI) y el gobierno, en la medida en que las políticas económicas en el campo de la liberación de importaciones y en el crédito bancario, han afectado seriamente la tasa de ganancia. El gobierno por su parte alega que la ineficacia de los industriales, estimulada por las tasas de protección y por la restricción a las importaciones, dentro de condiciones monopólicas internas, es la que ha inducido este comportamiento.

Otro de los sectores impulsores de la actividad económica como es el de la construcción ha tenido también a partir de 1979 un gran receso. La construcción de vivienda que hasta este año venía creciendo a ritmos bastantes elevados, gracias a una gran expansión de la demanda proveniente de los grupos de altos ingresos (en gran parte por la demanda de aquellos grupos beneficiados por los ingresos de la marihuana y del café) empezó a resentirse. En este caso los precios de la vivienda alcanzaron niveles escandalosos, como se vio atrás, beneficiándose además los propietarios de la tierra, monopolizada en las grandes ciudades por un reducido número de empresas constructoras.

Los elevados precios alcanzados por las viviendas urbanas conjuntamente con un menor ritmo en el crecimiento de la demanda total ha sido quizás los factores que han incidido en esta recesión, a pesar de que la construcción ha contado con fondos prestables ociosos. Sin embargo, tal como lo sugieren algunos comentaristas, es muy posible que estos fondos, captados a través de las corporaciones de ahorro y vivienda se hayan canalizado hacia otras actividades, quizás hacia la especulación en los mercados financieros.

El comportamiento de las restantes actividades económicas no ha sido tan limitado en su crecimiento, destacándose un cierto dinamismo en los sectores comercial y financiero. El primero, favorecido por la liberación de importaciones y el segundo por la liberación de las tasas de interés, por la gran diversificación de los activos y por la orientación de una gran proporción de los fondos de acumulación de las empresas hacia la especulación financiera.

El Sector Externo

El sector externo siempre ha desempeñado un papel de primera importancia en el comportamiento de la economía colombiana, mas cuando se reconoce la gran dependencia de la inversión de los sectores productivos de la disponibilidad de divisas, aunque desde el punto de vista de mercados para la producción nacional no ha tenido gran relevancia.

Las exportaciones colombianas son altamente dependientes de café, el cual ha llegado a representar en otros años cerca del 80% de las exportaciones colombianas. Teniendo en cuenta esta elevada proporción se comprenderá la enorme influencia que posee el comportamiento de los precios internacionales del café sobre el sector externo y sobre el

conjunto de la economía. Así mismo, el manejo de la política cafetera relacionada con los ingresos del gremio cafetero que actúa como un poderoso grupo monopolista, tiene una enorme incidencia sobre la política macroeconómica, el comportamiento de las demandas agregadas, la oferta monetaria, etc.

A partir de 1974, los precios internacionales del café evidenciaron una gran tendencia hacia su crecimiento, provocada en gran parte por las heladas en la zona cafetera del Brasil, lo que ocasionó una gran reducción de la oferta exportable mundial. Ante la bonanza de los precios del café, el valor de las exportaciones colombianas se incrementó en forma sustancial teniendo un gran efecto sobre los ingresos de la balanza cambiaria. Por su parte, los ingresos del gremio cafetero aumentaron sustancialmente al incrementarse el precio interno del café. El Estado por su parte, fue el menos favorecido con esta bonanza ante la incapacidad para incrementar su acción impositiva sobre los cafeteros.

Los ingresos del exterior se vieron a su vez fortalecidos por la entrada de divisas provenientes del tráfico de marihuana y cocaína, y estos dos factores condujeron a que Colombia entrara a gozar de una posición en extremo favorable en sus relaciones comerciales con el resto del mundo. A su vez, sirvieron para romper el "estrangulamiento externo", lo que se suponía estimularía un mayor nivel de importaciones.

Las exportaciones industriales por su parte, aunque demostraron un cierto dinamismo a partir de 1970 no han llegado a tener una significativa participación en el valor de la producción industrial ni en el de las exportaciones a pesar de los grandes incentivos de que han sido objeto.

Estos incentivos hacen parte de una estrategia de desarrollo que desde el gobierno de López Michelsen ha intentado ponerse en marcha y que se resumía en la consigna: "hacer de Colombia el Japón de América". Sin embargo, a pesar de los incentivos otorgados: descuentos tributarios a través de los denominados Certificados de Abono tributario (CAT), otorgamiento de crédito a tasa de interés subsidiadas a través de Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO) y mantenimiento de una elevada tasa de devaluación del tipo de cambio, la posición de Colombia en el mercado mundial de manufacturas es marginal destacándose apenas en el ramo de textiles y de confecciones.

Otro de los factores que también vinieron a fortalecer el ingreso de moneda extranjera fue el movimiento de capitales de corto plazo,

estimulado por las altas tasas internas de interés y que ante el ritmo de devaluación, ofrecían a los capitales extranjeros especulamos una tasa muy superior a la vigente en los mercados mundiales.

Todos estos elementos condujeron a que la economía colombiana lograra incrementar en forma sustancial sus reservas internacionales, lo que simultáneamente produjo una gran distorsión en los mercados monetarios internos, a través de sus efectos sobre la expansión de la oferta monetaria, que hizo más difícil el control monetario.

A partir de 1979 los precios internacionales del café empezaron a decaer. Sin embargo, su valor logró sostenerse con un mayor volumen de exportaciones. En el año de 1980 estas alcanzaron un valor de 1.985 millones de dólares. Los ingresos de divisas a través del sector servicios, "ventanilla siniestra", continuaron en aumento llegando a representar 1.223 millones de dólares, de los cuales la mayor parte, como se dijo, pertenece a marihuana y cocaína.

Las exportaciones más afectadas a partir de 1979 fueron las de origen industrial, las cuales apenas crecieron en un 11%, lo que significa un incremento negativo en términos reales. La recesión mundial y más. La escasa o nula competitividad de las manufacturas colombianas en el mercado mundial, fueron los factores que incidieron en este comportamiento a pesar de los grandes incentivos recibidos, como fue fundamentalmente, la intensa devaluación efectuada en el pasado año, que alcanzó un 16%.

Este comportamiento de la tasa de devaluación impidió un mayor movimiento de los capitales de corto plazo, lo que contrarrestó el efecto de las altas tasas de interés alcanzadas durante este año. El efecto, positivo si se quiere, de controlar el ingreso de capitales especulativos, constituyó un elevado precio en términos de su impacto sobre el nivel interno de costos, al no lograrse simultáneamente un crecimiento de las exportaciones industriales, favoreciendo ampliamente, a pesar de su ineficiencia, a estos grupos económicos. En el campo de las importaciones, las de petróleo están adquiriendo cada vez mayor importancia, como resultado de los incrementos en los precios internacionales y del menor ritmo de producción interno frente al crecimiento del consumo, abriéndose cada vez más la brecha entre producción interna y consumo. Las perspectivas futuras no son muy halagüeñas y se prevé que en los próximos años las importaciones de petróleo tengan un mayor peso. En el pasado año las importaciones de combustibles alcanzaron un valor de 484 millones de dólares, lo que representa alrededor de un 16% de las exportaciones de bienes.

El comportamiento de las restantes importaciones, constituidas en su mayor proporción por maquinaria y equipo, demostró un crecimiento no muy extenso a pesar de lo cual la balanza comercial durante el pasado año fue deficitaria. No obstante este déficit fue más que compensado por los ingresos de la cuenta de servicios y de capitales de corto y largo plazo, estos últimos resultado de la contratación de deuda externa por parte del gobierno nacional a fin de financiar un gran volumen de la inversión pública. Gracias a estas entradas de capitales, las reservas internacionales se incrementaron en más de 1.000 millones de dólares, alcanzando un nivel de 5.419 millones de dólares.

El comportamiento del sector público y los planes de Gobierno

Como se mencionó inicialmente, la inversión pública del gobierno nacional sufrió durante los años 1976 a 1979 una severa restricción que pretendía contraer la demanda agregada y evitar una mayor expansión de la oferta monetaria. De hecho, en la medida en que la inversión pública se financia generalmente con préstamos externos, la utilización de éstos significa ejercer una mayor presión sobre la oferta monetaria, dada la situación favorable de la balanza cambiaria.

Esta situación demuestra cómo los ingresos tributarios del listado resultan insuficientes para satisfacer los requerimientos de inversión del sector público, lo que reclama la necesidad de acudir al endeudamiento externo. Tales requerimientos de préstamos externos se hacen cada vez más necesarios en la medida que las contrarreformas tributarias (leyes de alivio tributario) le quitaron la mayor capacidad de captar recursos que había logrado la estructura tributaria a raíz de la reforma de 1974.

Sin embargo, en el pasado año, el gobierno decidió utilizar la deuda externa a fin de adelantar una serie de inversiones de infraestructura que eran inaplazables y que estaban contempladas en el Plan de Desarrollo que el gobierno de Turbay sacó a la luz pública en marzo de 1980 y que se denominó Plan de Integración Nacional.

Los principios básicos de este Plan, se inspiran en las ideas monetaristas y librecambistas, poniendo el énfasis en la búsqueda de una mayor eficiencia de la economía en todos sus niveles, a través de los instrumentos de política ya mencionados.

En el campo del proceso ingreso-gasto del sector público, el Plan recalca su óptima utilización. De acuerdo con esta idea, se trata de orientar el gusto público hacia aquellas actividades que según el plan

tienen una elevada rentabilidad social como son las inversiones en infraestructura física (energía, comunicaciones, transporte, etc.). Por el contrario, se plantea la necesidad de controlar todos aquellos gastos que se creen tienen una baja rentabilidad, como son los de salud, educación, y en general los de funcionamiento del Estado.

Se trata entonces de un Plan con tendencias claramente desarrollistas, que pretende favorecer el proceso de acumulación y de crecimiento de la economía, prestando escasa atención al gasto social cuyos positivos efectos distribuidos están ampliamente comprobados. De acuerdo con estos objetivos, el plan se propone realizar una serie de inversiones en el período que va hasta 1984 y que en su mayoría se concentran en los sectores ya mencionados. Sin embargo, a pesar de las pretendidas restricciones sobre los gastos sociales y de funcionamiento, las inversiones proyectadas requieren de un elevado grado de endeudamiento externo: cerca de un 70% del valor de estas inversiones se financiarán con créditos externos, lo que muestra la renuencia del actual gobierno a buscar medios alternativos, de financiación a través de reformas a la estructura tributaria. En esta perspectiva, el crecimiento futuro de la economía colombiana tendrá cada vez menores beneficios para los amplios grupos de población que se mantienen dentro de condiciones de extrema pobreza.

Las Orientaciones de la Política Económica

Inspirada en las ideas monetaristas-neoliberales, con gran arraigo en un gran número de países latinoamericanos, Chile y Argentina preferencialmente, la política económica de este mismo año ha logrado consolidarse en las esferas gubernamentales colombianas constituyéndose en la ideología que ha orientado la acción económica de los dos últimos gobiernos, desempeñados ambos por representantes del partido liberal.

Los objetivos de esta política, estabilización y crecimiento económico, han pretendido alcanzarse mediante el control sobre la expansión de la oferta monetaria y la obtención de más altos niveles de eficiencia, buscando una mayor competitividad a través de la apertura de la economía al comercio internacional. Los instrumentos de esta política, que aplica un tratamiento de "shock" a la economía con el fin de eliminar todos los factores que afectan su eficiencia, han sido:

- control y eliminación de todas aquellas acciones que promueven la expansión excesiva de la oferta monetaria (déficits fiscales, redescuentos, etc.)

- eliminación de los subsidios otorgados por el Estado, que no sólo afectan los ingresos públicos sino que obstaculizan una eficiente asignación de los recursos (subsidios al transporte, a través de bajos precios a la gasolina, subsidios a los productos alimenticios, etc.).

- liberación de las tasas de interés, colocándolas en niveles que promuevan una mayor tasa de ahorro y que reflejen el real costo del capital a fin de orientar este recurso hacia las actividades más eficientes.

- liberación de importaciones y reducciones en las tasas de protección nominal y efectiva, con el propósito de estimular la competencia y orientar la asignación de recursos de la economía hacia las actividades con mayores ventajas comparativas.

- establecimiento de un tipo de cambio que refleje los costos internos de la economía a fin de estimular las exportaciones diferentes al café y eliminar los subsidios a las importaciones.

La Política de Estabilización

La política de control sobre la expansión de la oferta monetaria significó la adopción de una serie de medidas que afectaron el funcionamiento de los mercados financieros. Hasta 1973, la política financiera estuvo orientada hacia el apoyo del proceso de acumulación de capital de los distintos sectores económicos a través del denominado "crédito de fomento" que financiaba una gran proporción de la actividad productiva, a Tasas de interés subsidiadas (negativas en términos reales).

En la medida que dicho crédito se apoyaba en la apertura de cupos de redescuento por parte de la banca central (Banco de la República), sus demandas generaban fuertes presiones sobre la expansión de la oferta monetaria. Adicionalmente, esta política conducía a mantener en bajos niveles las tasas de interés limitando la captación de fondos por parte de las entidades financieras y un desarrollo del mercado de capitales más dinámico y diversificado.

Las reformas introducidas por el gobierno de López M. y su Ministerio de Hacienda, Rodrigo Botero, tendieron precisamente a limitar el "crédito de fomento" y mediante el incremento de las tasas de interés procuraron fortalecer la captación de fondos de ahorro mediante la emisión de activos financieros a tasas de interés atractivas por parte de los intermediarios. Con estas medidas, el redescuento como fuente de expansión monetaria quedó severamente restringido en tanto que el sector financiero recibió un notable impulso.

En verdad, esta política de típico corte monetarista, no sólo estaba dirigida hacia el control de la oferta monetaria, sino que también propendía por un desarrollo más dinámico del mercado de capitales que estimulase la eficiencia económica al eliminar las trabas a los movimientos del capital.

De acuerdo con estas ideas, se intentaría buscar una asignación óptima del capital en aquellas actividades en donde fuese capaz de generar una rentabilidad superior o igual a su real costo de oportunidad, medido por la tasa de interés y seleccionando aquellas técnicas más eficientes correspondientes a una economía de bajos salarios.

Otra de las medidas encaminadas a controlar la oferta monetaria se relacionó con el funcionamiento del proceso ingreso-gasto del sector público. Los déficit fiscales venían hasta el año de 1973 constituyéndose en uno de los factores que más afectaban la expansión de la cantidad de dinero de la economía y hacían difícil el control de ésta. En el gobierno de López se introdujo una reforma tributaria que buscaba aparte de sus efectos sobre la distribución del ingreso, generar mayores ingresos al sector público que posibilitaran un gasto sin necesidad de acudir a la emisión monetaria.

Aparte de estas medidas: tendientes a ejercer un mayor control sobre la cantidad de dinero de la economía, la política de estabilización se encaminó a eliminar los subsidios que afectaban los ingresos fiscales y, de otra parte, en lugar de adoptar una política de control de precios internos, entró a liberar las importaciones de tal forma que sirvieran como un mecanismo de control interno de los precios.

El Fracaso de la Política de Estabilización

El propósito de control de la cantidad de dinero de la economía bien pronto se vio entorpecido por el notable incremento de los precios internacionales del café, principal producto de exportación colombiano. Ante la incapacidad política del gobierno para limitar las aspiraciones de uno de los gremios más poderosos del país, la Federación Nacional de Cafeteros, la bonanza cafetera significó una gran expansión de los ingresos monetarios de los productores y exportadores del grano, donde un gran impulso a la demanda de la economía, que engendró nuevas presiones inflacionarias.

La espectacular avalancha de ingresos del exterior determinó una gran expansión de la base monetaria la que obligó a una severa restricción del crédito corno único recurso para contener el fuerte

incremento del dinero. Tal medida se tradujo en una elevación aún mayor de las tasas de interés bancario, las cuales se colocaron en niveles superiores al 35%.

Otra medida adoptada para contrarrestar la expansión de la demanda agregada fue la restricción del gasto público. En los años 76-77-78 y 79 la inversión pública alcanzó uno de los más bajos niveles de su historia, lográndose en estos años superávits fiscales que contribuyeron sin duda a frenar la expansión de la demanda agregada de la economía, pero al costo de restringir la inversión en sectores claves de la economía como los de infraestructura física.

Con el ánimo de contener aun más la expansión monetaria, el gobierno decidió ampliar sus operaciones de mercado abierto, lanzado al mercado de capitales un gran volumen de bonos que gozaban de altas tasas de rentabilidad a fin de hacerlas más competitivas. Esta acción si bien logró captar recursos por parte del Estado, contribuyó más a la elevación de las tasas de interés.

A pesar del severo control ejercido sobre la cantidad de dinero, el proceso inflacionario de la economía no demostró ninguna tendencia hacia la aminoración de su intensidad, manteniéndose un crecimiento de los precios que fluctuó entre un 25% y un 30%.

En general, la política monetaria demostró en cierta medida su ineficacia para controlar el ritmo de crecimiento del nivel de precios. Quizás el único éxito que pudo reclamar fue el de impedir que este ritmo fuera aún más acelerado, tal y como el mismo gobierno lo ha reconocido. Los esfuerzos por controlar la oferta monetaria se vieron entorpecido por la misma actitud de las autoridades monetarias de dar concesiones a ciertos grupos económicos, preferencialmente cafeteros y los exportadores, actitudes que revelan las contradicciones políticas originadas por las medidas contraccionistas.

Así, sostener el ritmo de devaluación a fin de no afectar el ingreso de los exportadores generaba mayores expansiones de la oferta monetaria. Restringir el ritmo de devaluación inducía, frente a tasas de interés internas, el flujo de capitales extranjeros especulativos que afectaban a su vez la oferta monetaria. En la práctica, el gobierno optó por una política de aguas tibias, manteniendo un ritmo de devaluación no muy intenso en relación con el incremento de los precios internos.

Adicionalmente, los distintos instrumentos de política empleados y los comportamientos de la oferta agrícola, desembocaron en un incremento de los costos de producción, que presionaban por una

mayor disponibilidad de dinero por parte de las distintas unidades productivas.

Recordando la gran influencia del valor de importaciones dentro del costo de producción industrial y agrícola vía insumos, la gran participación de la producción alimenticia dentro del gasto total de las unidades familiares, y la mayor participación de las importaciones de petróleo dentro del consumo total de este producto, se entiende cómo las variaciones en el tipo de cambio, los incrementos de los precios de los productos agrícolas causados por el comportamiento de la oferta, y los mayores precios de los derivados del petróleo, gasolina, a causa de los continuos incrementos de los precios internacionales del petróleo, generaron fuertes presiones inflacionarias, causando un proceso acumulativo de incremento de costos, incremento de precios, incremento de la cantidad de dinero.

Dado el comportamiento generalizado de las grandes empresas oligopólicas de fijar sus precios en base a los costos, tratando de mantener e incluso elevar su margen de ganancias, los incrementos de costos y los mayores márgenes de ganancia se constituyen en fuente del proceso inflacionario. En estas condiciones, las restricciones sobre la cantidad de dinero irán a generar una violenta recesión de la economía acompañada de un proceso inflacionario de gran intensidad que demuestra el afán de los distintos gremios económicos de mantener e incrementar su participación en el ingreso.

La víctima de este comportamiento han sido los salarios de la fuerza de trabajo ya que ésta no ha tenido el suficiente poder de negociación que le permita un crecimiento de sus salarios nominales al mismo ritmo de la inflación. Frente a este estado de cosas bien puede afirmarse que el éxito de la política económica en impedir mayores tasas de inflación, se ha originado en la gran restricción a que ha estado sometida la tasa de salario, evidenciando así la orientación que en este campo ha sustentado el gobierno nacional.

En 1980 las expansiones de la oferta monetaria originados en el sector externo se hicieron más débiles ante la caída de los precios internacionales del café, lo que permitió una cierta liberación de las restricciones crediticias bancarias. Sin embargo, las tasas de interés no demostraron ninguna tendencia hacia la baja y, por el contrario, a fin de hacer más competitivos algunos valores, se decidió incrementar su rentabilidad. Así, 1980 culminó con una tasa de inflación del 26% una tasa de interés promedio del 35%, alta especulación en los mercados financieros, quejas de los gremios económicos y un gran deterioro de los salarios reales.

Concentración y Centralización del Capital

Uno de los fenómenos más destacados en la evolución de la economía colombiana en la década del setenta lo constituyó la consolidación de un proceso de concentración y centralización del capital promovido por los grandes grupos financieros; e industriales que se venían conformando a partir de los 60.

Estos poderosos grupos que hoy controlan un elevado porcentaje del capital industrial, comercial y financiero tuvieron su origen en las estructuras oligopólicas que desde muy temprano caracterizaron a las distintas ramas productivas de la economía nacional. A través de un proceso de diversificación de sus actividades, como forma de expansión basado en un crecimiento interno y externo, (diversificación de inversiones y compras de empresas ya existentes), se conformaron grandes conglomerados industriales comerciales y financieros.

La expansión de estos conglomerados significó una estrecha vinculación entre los capitales industriales, financieras y comerciales y provocó un proceso creciente de centralización del capital que se traducía con la eliminación de los pequeños y medianos capitales que tenían algún derecho de propiedad en las grandes empresas oligopólicas.

Por otra parte, en su afán de lograr un mayor control y expandir sus activos, los grandes grupos económicos sostuvieron una gran lucha entre sí, utilizando cualquier recurso a su alcance. Como participantes de estas luchas sobresalen los Grupos de Ardila Lule, Grupo Grancolombiano, Grupo Banco de Bogotá, Grupo Santo Domingo y Grupo Suramericano.

Sin considerar las empresas dominadas por el capital extranjero, y las empresas del Estado, la mayor proporción del proceso de acumulación de capital de la economía reposa sobre las empresas controladas por estos grupos y sus decisiones sobre inversión son las que determinan en alto grado el crecimiento de la economía. De allí la importancia del análisis de la composición de sus inversiones (capital productivo y capital financiero) y las fuentes de sus recursos.

En general, al gozar de un gran poder de monopolio las empresas industriales de estos grupos económicos logran obtener elevadas tasas de ganancia que pueden servir como fuentes de inversión dentro de la misma empresa o en otras del mismo grupo, estableciendo una compleja red de venta y compra de activos financieros entre las unida-

des con superávit y las deficitarias. Por otra parte, las empresas financieras a través del proceso de diversificación de activos financieros y de crecimiento de estos mismos, han logrado un extraordinario desarrollo lo que les ha permitido mantener tasas de acumulación, que revierten en grandes beneficios para los grupos económicos. Quizás el hecho más protuberante de la evolución de la economía colombiana en los últimos años ha sido el extraordinario crecimiento del sector financiero.

Tales condiciones revelan cómo dentro de la economía colombiana la acumulación de capital no ha revertido en un creciente proceso de inversión en capital productivo sino en activos financieros, lo que ha producido una transformación radical en los derechos de propiedad y en la distribución de ingreso entre ganadas y salarios.

LA REPRESIÓN Y LAS LUCHAS DEMOCRÁTICAS

Uno de los aspectos centrales de la situación durante los últimos años giró alrededor del enfrentamiento entre el gobierno y los grupos armados de oposición. A partir de enero de 1979 cuando fue descubierto el audaz robo de armas hecho por el M-19 a un importante cuartel militar, el estado desató una amplia campaña represiva, dirigida no sólo contra los diversos grupos guerrilleros, sino contra todo lo que podía parecer como opuesto al régimen capitalista vigente. Esta campaña, cuya intensidad no correspondía a la magnitud de la amenaza militar planteada por el M-19 o las guerrillas rurales, se caracterizó por el uso indiscriminado del terror oficial. Detenciones masivas, allanamientos, torturas y muertes de detenidos, hicieron parte de esta estrategia, de intimidación, mantenida vigorosamente por el gobierno durante 1979 y buena parte de 1980. Estos hechos no hacían, por otra parte, sino confirmar un proceso de endurecimiento del tratamiento que da el gobierno a la oposición, ya manifiesto en años anteriores, y que había encontrado un instrumento legal por excelencia en el llamado Estatuto de Seguridad, expedido en septiembre de 1978 por el cual codificó el conjunto de decretos que han ido entregando al ejército el control político de la oposición. Ni torturas ni asesinatos oficiales eran fenómenos nuevos: lo nuevo estaba en su generalización, en el hecho de que su utilización encontraba justificaciones y defensas explícitas de parte de los voceros del gobierno o de los partidos políticos, y el que entre sus primeras víctimas se hallaran miembros conspicuos de la burguesía colombiana y la intelectualidad.

Para la oposición de izquierda la situación aparecía como crítica: sin una amplia base social, ligada en forma débil a la resistencia espontánea o gremial de obreros, campesinos, grupos marginales, parecía incapaz de evitar siguiera el deterioro de un sistema legal y político que pese a sus tradicionales contenidos represivos mantenía aún cierto grado de funcionamiento de los sistemas constitucionales y legales de la tradición liberal. Ante el riesgo de una creciente militarización del país, que parecía en peligro de reproducir el proceso uruguayo, y enfrentado a una violación cada vez más cínica de los derechos humanos, la izquierda impulsó la conformación de un amplio frente de defensa de éstos y de rechazo al militarismo. Se trató en especial de una estrategia eminentemente defensiva, pese a ocasionales intentos de dar un contenido más reivindicativo al rechazo a la tortura, la represión y el poder militar y de unir la lucha por la democracia con la lucha por transformaciones sociales de sentido popular. Pero pese a esta limitación, los resultados del esfuerzo no fueron despreciables. La amplia campaña de denuncias y protestas hizo que el país, pese al firme control de la prensa y los medios de comunicación por los grupos iluminantes, reconociera y discutiera las torturas, los recortes a las libertades ciudadanas, la arbitrariedad de un sistema judicial que entregaba al ejército el juicio de los opositores, la violencia contra los grupos indígenas, obreros y campesinos. El I foro por los Derechos Humanos, reunido en marzo de 1979, y el II Foro, reunido en agosto de 1980 contaron con la presencia y el respaldo de las centrales obreras, de los casos más visibles de la intelectualidad, de los movimientos y partidos políticos de izquierda, y de sectores inesperadamente amplios de los partidos tradicionales y de la iglesia. El eco internacional recibido por las protestas contra la violación de las reglas legales y los derechos individuales produjo una notable irritación al gobierno, y el viaje que el presidente Turbay hizo a Europa en mayo y junio de 1979 no hizo sino acentuar la imagen negativa que pretendía borrar. Cuando en abril de 1980 Amnistía internacional presentó un extenso informe que confirmaba la existencia de torturas y muertes, el gobierno consideró el informe una violación subversiva de la soberanía nacional y denunció a Amnistía como agente de los gobiernos comunistas. Pero en todo caso el gobierno quedó políticamente a la defensiva, y aunque continuó negando tozudamente hechos que toda la opinión reconocía, parece haber tratado de buscar mecanismos represivos menos violentos y espectaculares, sobre todo a partir de mediados de 1980. De todos modos, en 1979 se realizaron más de 4.000 detenciones, la mayoría de personas acusadas de pertenecer al M-19 o a las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a fines del año se inició el Consejo Militar de Guerra contra 219 personas acusadas de pertenecer al M-19, que ha resultado un buen ejemplo de la prontitud de la justicia militar: 14 meses después de su iniciación se halla aún lejos de concluir, y ha mostrado lo arbitrario de un sistema que periódicamente deja libres a puñados de detenidos después de dos o más años de cárcel, al comprobarse su absoluta falta de vinculación con los movimientos terroristas o guerrilleros.

El enfrentamiento entre el M-19 y el gobierno adquirió nuevos y dramáticos matices con la toma de la embajada de la República Dominicana en febrero de 1980. En este caso el gobierno optó por buscar una solución negociada y a finales de abril los autores del golpe pudieron salir del país. A partir de este momento parece haber recobrado algún peso las tendencias más civilistas y legalistas del gobierno, frente a los grupos militares. Aunque la tutela de éstos sobre el ejecutivo se mantiene, éste ha buscado algunas salidas políticas al enfrentamiento con la oposición armada y parece haber logrado imponer algunas limitaciones, sobre todo en los casos y las regiones donde pueden provocarse protestas más ruidosas, a las formas más arbitrarias y violentas de represión. Sin embargo, siguieron haciéndose detenciones masivas frecuentes (en el mes de julio de 1980 por ejemplo, a raíz de la fuga de dos detenidos del M-19, se detuvieron cerca de 2.000 personas) y las acciones militares contra las áreas donde operan los grupos guerrilleros, sobre todo los de la FARC no han cesado.

Con ocasión de la toma de la embajada, luego de las negociaciones siguientes, el M-19 manifestó su interés en un retorno a la legalidad y a la acción política abierta, a condición de que el gobierno levantara el estado de sitio y se restablecieran las condiciones para la acción política popular legal, y de una amnistía para los grupos armados. El presidente de la república, en efecto, presentó en julio al Congreso un proyecto de amnistía, que reflejaba más las presiones militares que las opiniones de los políticos del gobierno. Aunque inicialmente se crearon algunas esperanzas en que el gobierno aceptara conceder una genuina amnistía, éstas se desmintieron con el proyecto oficial, que era una burla evidente: sólo se concedía amnistía a quienes se encontraran libres, no estuvieron implicados en delitos atroces, entre los cuales se incluía el secuestro, y se presentaron ante las autoridades para que éstas decidieran si les era aplicable la amnistía. Evidentemente un proyecto que sometía a quienes estaban aún libres al riesgo de ser detenidos y acusados de delitos como el secuestro (aplicable, al

menos bajo la forma de complicidad, a todos los militantes del M-19 y de la FARC) no era aceptable para los grupos armados y solo servía para tratar de dar la imagen de que el gobierno buscaba la paz y solo la tozudez de los guerrilleros impedía lograrla. En el fondo, probablemente el proyecto respondía a la oposición de los militares a cualquier proceso que pudiera conducir la eliminación del Estado de Sitio, con el aumento de poder y las ventajas, incluso económicas y salariales que este trae al ejército.

Los sectores de oposición y algunos disidentes liberales propugnaron por la modificación del proyecto, ante todo para incluir a los detenidos entre los beneficiarios y para eliminar la restricción relativa a los delitos conexos. El proyecto del ejecutivo tuvo tan poca acogida que fue derrotado en la Cámara de Representantes en noviembre de 1980 y se acogieron los puntos de vista de la oposición, pero ante la presión militar la cámara aprobó finalmente un proyecto "Transaccional" cuya única diferencia importante con el original era la concesión de la amnistía a los detenidos, en caso de que cuatro meses después de aprobada la ley se dieran, a juicio del ejecutivo, condiciones adecuadas para concederla. De nuevo se condicionaba la libertad de los detenidos a la entrega previa de quienes se encontraban libres, y se mantenía el riesgo para éstos de ser detenido en el momento de presentarse. El proyecto fue aprobado en el Senado de la República, en marzo pasado, pero la respuesta de los grupos armados muestra que sólo se acogerán a la amnistía algunos individuos y grupos pequeños. De este modo, las esperanzas de una disminución de la tensión, a la que contribuiría una apertura democrática del gobierno y una disminución de las formas armadas de acción política, se han reducido de nuevo bruscamente, y puede temerse por el contrario un endurecimiento de las posiciones del gobierno y un recrudecimiento de la violencia oficial y de las acciones de los grupos armados.

Elecciones y Legitimidad del Gobierno

En marzo de 1980 tuvieron lugar las elecciones municipales y provinciales en todo el país. De nuevo, como ya es habitual, se hicieron bajo un régimen de estado de sitio y en un ambiente que combinada la represión y la violencia oficiales en ciertas regiones del país con una relativa amplitud para el debate político en los núcleos urbanos más importantes. En particular, las áreas de influencia rural del Partido Comunista fueron sometidas a una campaña de hostigamiento que se expresó con la detención de centenares de campesinos,

sindicados de pertenecer a las FARC, y en el asesinato de varios dirigentes locales y regionales. Los grupos de izquierda que habían respaldado El Foro de los Derechos Humanos trataron de formar una amplia coalición electoral, con el nombre de Frente Democrático, que a la postre se redujo a un mosaico de alianzas locales entre el Partido Comunista y el nuevo movimiento FIRMES, reforzada en ocasiones por grupos disidentes del partido liberal. El grupo prochino MOIR presentó listas separadas, bajo el nombre de Frente de Unidad del Pueblo, así como los dos principales grupos trotskistas (Partido Socialista de los Trabajadores y Partido Socialista Revolucionario). El partido liberal y el partido conservador se presentaron divididos en múltiples listas, pero unidos en su respaldo al ejecutivo, con excepción de un grupo liberal vinculado al expresidente Carlos Lleras Restrepo, que se presentó como independiente del gobierno y avanzó algunas críticas a su gestión.

Los resultados no satisficieron a nadie. La izquierda apenas mantuvo su votación tradicional y apenas pudo alegrarse por un notable resurgimiento en Bogotá, donde obtuvo el 16% de los votos y 4 de 10 concejales, y por el 31% logrado en Caquetá, donde desplazó a los conservadores al tercer lugar. Fue evidente el retroceso del Partido Comunista en sus áreas rurales tradicionales, y resultó muy escaso el apoyo electoral a FIRMES, cuya principal satisfacción fue haber logrado representación en el Concejo de Bogotá.

Como puede verse en el siguiente cuadro, se mantuvo, con un leve aumento, la tendencia general a la abstención:

PARTICIPACION ELECTORAL EN ELECCIONES REGIONALES, 1972 - 1980

	Población en	Votación total	%
1972	8.950.000	2.947.125	32,9
1976	10.391.000	3.265.974	31,4
1980	13.848.000	4.215.172	30,4

Esta tendencia al descenso en la participación electoral revela ante todo el diferente comportamiento de los votantes urbanos y rurales y el peso creciente de las grandes ciudades en el total de la población. En efecto las tasas de participación electoral en el sector rural se han mantenido estables o han aumentado; esto refleja prin-

principalmente que los sistemas clientelistas y caciquistas tradicionales conservan allí su eficacia, de modo que se mantiene una votación cautiva, sujeta a las manipulaciones y presiones de los agentes del gobierno, los caciques locales y los grandes propietarios. Por el contrario, en las ciudades ha disminuído abruptamente la participación electoral, de los cuales buen indicio el resultado en las cuatro ciudades principales, que contaban en 1980 con el 40% de la población del país, y de las cuales sólo Cali, donde se presentó un vigoroso movimiento populista de oposición, mostró un leve aumento en el porcentaje de votantes.

TASAS DE PARTICIPACION ELECTORAL PORCENTUAL EN LAS CUATRO PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS

Año	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Cali
1972	22	27	43	30
1976	14	18	35	18
1980	13	12	21	23

Aunque las investigaciones sobre la abstención no permiten sacar conclusiones muy precisas, parece razonable suponer que en las ciudades, cuyo crecimiento se debe ante todo a la migración, se da un proceso acelerado de ruptura con las redes y mecanismos de poder clientelista, y que la afiliación política tradicional, usualmente muy firme en Colombia, ha perdido mucha de su fuerza. Las encuestas revelan que la abstención es más pronunciada mientras más baja es la ubicación social del votante, y que los abstencionistas de los estratos populares tienen una percepción del sistema y el gobierno crecientemente crítica. Sin embargo, se trata de sectores que no ven en los grupos de izquierda una alternativa política viable. En esta situación, la mayoría de los votantes apoyan a los partidos de gobierno, y las elecciones de 1980 mantuvieron los márgenes tradicionales de estos grupos: el liberalismo obtuvo el 54.5 de la votación, el conservatismo el 38.2, los grupos de izquierda cerca del 3.5% y otros grupos (entre lo que sobresale el Movimiento Cívico, un grupo populista de Cali que logró en esta ciudad el 36% de los votos), el 2.8%. Cuatro años antes el liberalismo había recibido el 52.2%, el conservatismo 39.2% y los grupos de izquierda el 4.6%.

Con estos resultados, el gobierno conserva cierta legitimidad; en cuanto la opinión expresada electoralmente le da una abrumadora

mayoría, pero esta legitimidad resulta precaria y cuestionable, en cuanto una proporción creciente de la población, que ya llega al 70%, se mantiene por fuera de los procesos electorales. Apoyado vigorosamente por el ejército y por el conjunto de las clases dominantes (entre las cuales sólo se ha advertido algún descontento entre los grupos de la burguesía industrial más tradicional), se enfrenta el gobierno a un rechazo eminentemente pasivo de los sectores populares del país.

Los sectores que participan electoralmente lo hacen en buena parte por estar ligado directa e individualmente a los mecanismos de distribución de beneficios del Estado, en particular los empleos burocráticos y la distribución de algunos servicios sociales. Los dirigentes políticos dependen por lo tanto en buena parte del apoyo del ejecutivo para garantizar sus elecciones, lo que ha conducido a una subordinación cada vez mayor de los órganos legislativos al ejecutivo, además de haber impulsado más y más la generalización de la corrupción en el manejo de los recursos públicos,

En un sistema tan rígidamente centralista, la elección de presidente constituye la disputa política por excelencia, y los dos partidos tradicionales iniciaron ya en 1980 los procesos de selección de sus candidatos para 1982. En el partido conservador la candidatura de Belisario Betancur parece contar con mayor apoyo, aunque debe enfrentarse al esfuerzo de Álvaro Gómez Hurtado, hijo del dictador conservador Laureano Gómez, quien ha tratado de borrar en algo su imagen extremista, pero que sigue representando grupos que ven con alguna desconfianza la volubilidad ideológica de Betancur y su búsqueda ocasional de apoyo entre sectores más progresistas. En el liberalismo los núcleos más tradicionales han impulsado la candidatura de Virgilio Barco, reciente embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, pero con una reducida imagen pública y poca vinculación con los dirigentes regionales liberales, que controlan el aparato del partido. Fuera de Barco, se han presentado las candidaturas de Alberto Santofimio Botero, un controvertido y contradictorio dirigente del Departamento del Tolima, varias veces acusado de corrupción, y la de Augusto Espinosa Valderrama. Pese a que ha reiterado su decisión de no ser candidato de nuevo, el ex presidente Alfonso López Michelsen ha sido postulado por varios grupos liberales, cuyas posibilidades surgen ante todo del hecho de que cualquier otro candidato liberal tendrá serias dificultades para contar con el apoyo general del liberalismo, y cualquier división de este partido dará el triunfo al partido conservador.

En la izquierda, la figura con mayor respaldo es, paradójicamente, la del ex canciller conservador Alfredo Vásquez Carrizosa, quien durante los últimos años se ha convertido en el más visible defensor de los derechos humanos y de algunas reformas sociales, y quien podría contar con el apoyo de un Partido Comunista interesado en una coalición política relativamente amplia.

A dos años y medio de su iniciación, el gobierno de Turbay aparece relativamente estable y sólido. Ha contado con un amplio consenso burgués para el desarrollo de su política de represión a los sectores de oposición, y logró concretar algunas reformas institucionales que aumentan la capacidad de control del estado. En 1979 fue aprobada una reforma constitucional que ordena que sólo liberales y conservadores podrán hacer parte del sistema judicial, y que modifica la estructura de este sistema. Investido de facultades extraordinarias, expidió la ley de Reforma Universitaria, que centralizó la dirección de la educación superior en el ejecutivo nacional y dio amplios poderes a los rectores, nombrados por el ejecutivo, para conducir sus instituciones. Dictó también nuevos códigos penales, en los cuales se incorporaron, con drásticas penalidades, la mayoría de las conductas reprimidas por el Estatuto de Seguridad y las demás medidas del Estado de Sitio.

En la medida en que la evolución política reciente parece haber alejado los riesgos de una dictadura militar abierta, puede esperarse una acción política más decidida de la izquierda y un desarrollo más amplio de los movimientos reivindicativos obreros y campesinos. La conjunción real de ambos aspectos de la lucha popular parece aún distante, a pesar de la conciencia cada vez más clara de los dirigentes obreros de la necesidad de promover un proyecto político ajeno al liberalismo y al conservatismo¹. Pero en ausencia de esto, lo más probable es que mantenga, en el corto y mediano plazo la contradictoria estabilidad del sistema político colombiano.

1. La central obrera más grande, la UTC, tradicionalmente ligada al partido conservador, aprobó en su congreso de Medellín en diciembre de 1980, apoyar la constitución de un partido obrero, "de corte social demócrata". Sin embargo, es difícil ver en esto más que la preocupación de los dirigentes, por una base obrera cada vez más independiente de los partidos tradicionales.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Llegamos así a conclusiones insoslayables: en primer lugar la movilidad social, a pesar de su visible magnitud, no alcanza a ocultar el proceso de deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los colombianos, así la diferenciación de la estructura social, tanto en su dimensión regional como ocupacional, los disimulen. La diversificación de la economía y el rápido desarrollo de un mercado interno contribuyen a afianzar la imagen de una sociedad en proceso de mejoramiento general de su población. Múltiples indicadores sociales y económicos, sin embargo, desmienten la falsa apreciación de apariencias y hacen resaltar lo oculto: el proceso de creciente diferenciación social se traduce en que la brecha de ricos y pobres es aún bastante grande.

Frente a esta situación la política del Estado y las Clases que detectan el poder y el privilegio no solamente no responde a las declaraciones de intenciones de sus más pobres. Por el contrario, la política económica favorece los procesos a través de los cuales la brecha se amplía, y si en este proceso la legitimidad del poder sufre una apreciable pérdida, el recurso más a la mano no es como se podría pensar a partir de las intenciones declaradas el cambio en las orientaciones de la política económica y social: el recurso ha sido un endurecimiento paulatino del régimen, que recurre crecientemente al apoyo militar.